

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



**JUZGADO SEXTO CIVIL MUNICIPAL
Manizales, veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintiuno (2021).**

SENTENCIA DE TUTELA No. 84

Procede el Juzgado a decidir la acción de tutela instaurada por la señora **MARÍA LIGIA CADAVID DE LÓPEZ**, en contra de la **EPS CLÍNICA DE LA POLICÍA LA TOSCANA** y donde fue vinculada **SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL** por la presunta vulneración a sus derechos fundamentales a la salud en conexidad con el derecho a la vida.

I. ANTECEDENTES

Refiere la accionante que cuenta con 67 años de edad y que los servicios de salud han sido atendidos por la EPS CLÍNICA DE LA POLICÍA LA TOSCANA.

Que el día 22 de abril de 2021, asistió a cita con el especialista en otorrinolaringología, quien luego de revisar los exámenes realizados por fonoaudiología y audiometría, realizados el 05 de marzo de 2021, le ordenó la selección y adaptación de audífonos (AUDÍFONO DIGITAL DE CANAL ABIERTO DERECHO), dada su pérdida auditiva, la cual disminuye su calidad de vida.

Manifiesta que el día 23 de abril se dirigió a su EPS CLÍNICA DE LA POLICÍA LA TOSCANA en aras de realizar el proceso de autorización del ordenamiento médico, donde le manifestaron que no se contaba con un contrato y que regresara en 10 días hábiles.

Que pasados los días que le manifestaron, regresó para realizar dicha autorización a la EPS CLÍNICA DE LA POLICÍA LA TOSCANA donde le manifestaron que el tema estaba demorado y que regresara a fin de mes.

Aduce que ello conlleva a que siga soportando las molestias que posee al escuchar un ruido constante en su cabeza, además de no poderse comunicar con los demás, lo que ha llegado al punto de no poder realizar sus actividades solas.

Finaliza diciendo que es una situación insoportable, por lo que solicita le sean entregados de inmediato los audífonos ordenados por el galeno tratante.

PRUEBAS

Aportadas por la accionante: Copia de la cedula de ciudadanía, copia de carnet de afiliación, copia de los exámenes médicos, copia de la historia clínica donde se evidencia el ordenamiento medico deprecado.

Aportadas por **SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL**: Con la respuesta a la acción tuitiva, no se adjuntaron otros documentos.

Aportadas por **LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD DE CALDAS**: Con la respuesta a la acción tuitiva, esta entidad aportó copia de la autorización de servicios de salud.

II. TRÁMITE

Mediante auto fechado 11 de mayo de 2021, se admitió la acción de tutela, se decretaron las pruebas presentadas por la parte demandante y se dispuso la notificación a la entidad accionada y la entidad vinculada, para que se sirvieran dar respuesta al escrito de tutela, dentro del término de (2) días hábiles y solicitaran las pruebas que pretendiera hacer valer para su defensa.

III. PRONUNCIAMIENTO DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS.

LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD DE CALDAS en su escrito de contestación manifiesta que ya se había realizado la correspondiente autorización de los servicios deprecados por la accionante; situación que le fue comunicada para que reclamara dicha autorización y se desplazara a la entidad AUDICOM S.A.S para la entrega del audífono en la ciudad de Pereira.

De igual forma solicitan que no sea tutelado el tratamiento integral en tanto dicha unidad ha cumplido con todos los servicios de salud solicitados por la accionante.

La entidad vinculada, **SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL** solicitó se desvinculara de la presente acción en tanto es la **Unidad Prestadora de Salud Caldas**, la que debe asumir la responsabilidad en la acción de tutela, en tanto esta es una unidad desconcentrada por funciones, la cual cuenta con presupuesto propio de acuerdo a la resolución 001 del 02 de enero de 2020 “Por la cual se desagrega el detalle del anexo del Decreto de liquidación del Presupuesto General de la Nación No. 2411 del 30 de diciembre de 2019 para la Vigencia fiscal de 2020 se detallan los ingresos del presupuesto de Rentas y Gastos del Fondo Cuenta de Salud de la Policía Nacional y se efectúan asignaciones internas de apropiaciones del Presupuesto de Gastos de Salud al Nivel Central, Unidades Prestadoras de Salud y Hospital Central para la vigencia fiscal 2020”. Adicionalmente cuentan con la resolución 00277 del 27 de enero del 2020 “*Por la cual se delega en algunos funcionarios la competencia para contratar comprometer y ordenar el gasto, en desarrollo de las apropiaciones incorporadas al presupuesto de la Policía Nacional suscribir convenios y/o contratar*”

Por lo anterior, son los jefes de cada unidad los responsables de la correcta prestación de los servicios de salud, por medio de la red propia y contratada en su respectiva jurisdicción, siendo física y misionalmente imposible que la Directora de Sanidad pueda responsabilizarse de la atención directa de cada unidad.

Por ello, manifiestan que no son los responsables de atender el requerimiento efectuado en la acción tuitiva por falta de legitimación en la causa por pasiva.

IV. PROBLEMA JURÍDICO.

Una vez desplegados los anteriores supuestos fácticos, se procederá a determinar si efectivamente se vulneraron los derechos fundamentales constitucionales a la salud en conexidad con el derecho a la vida de la señora **MARIA LIGIA CADAVID DE LOPEZ**, por parte de la entidad accionada, al no autorizar y materializar la entrega del AUDÍFONO DIGITAL DE CANAL ABIERTO DERECHO que le fue prescrito por el médico tratante, además de solicitar tratamiento médico integral.

En esas condiciones se encuentra el expediente a despacho, y procede esta Funcionaria Judicial a resolver lo pertinente, de conformidad con las siguientes:

V. CONSIDERACIONES

DEL DERECHO A LA SALUD

La Honorable Corte Constitucional en Sentencia T-760 del 31 de Julio de 2008, en donde actuó como magistrado ponente el Dr. Manuel José Cepeda Espinosa, expresa en el numeral 3.2.1., que **“La Corte Constitucional ha reconocido el carácter fundamental del derecho a la salud”**. Sentencia en el que retoma algunos aspectos sobre el carácter de derecho fundamental que jurisprudencialmente y doctrinariamente se le ha concedido al derecho a la salud consagrado constitucionalmente; es así como, este operador jurídico se adhiere a la posición adoptada por el máximo tribunal constitucional; así:

“...En este orden de ideas, será fundamental todo derecho constitucional que funcionalmente esté dirigido a lograr la dignidad humana y sea traducible en un derecho subjetivo.”

3.2.5. La jurisprudencia constitucional reconoció a través de la figura de la ‘conexidad’, casos en que la indivisibilidad e interdependencia de los derechos son manifiestas, a tal punto, que el incumplimiento de una obligación derivada de un derecho que no sea considerado una libertad clásica (como la salud), implica, necesariamente, el incumplimiento de la obligación derivada de un derecho que sí es clasificado como esencial (como la vida).

Pero la utilidad práctica de tal argumentación, ha sido cuestionada por la propia jurisprudencia. De hecho, recientemente la Corte consideró ‘artificial’ tener que recurrir a la ‘estrategia de la conexidad’ para poder proteger el derecho constitucional invocado. Dijo al respecto,

“Hoy se muestra artificial predicar la exigencia de conexidad respecto de derechos fundamentales los cuales tienen todos – unos más que otros - una connotación prestacional innegable. Ese requerimiento debe entenderse en otros términos, es decir, en tanto enlace estrecho entre un conjunto de circunstancias que se presentan en el caso concreto y la necesidad de acudir a la acción de tutela en cuanto vía para hacer efectivo el derecho fundamental. Así, a propósito del derecho fundamental a la salud puede decirse que respecto de las prestaciones excluidas de las categorías legales y reglamentarias únicamente podrá acudirse al amparo por vía de acción de tutela en aquellos eventos en los cuales logre demostrarse que la falta de reconocimiento del derecho fundamental a la salud (i) significa a un mismo tiempo lesionar de manera seria

y directa la dignidad humana de la persona afectada con la vulneración del derecho; (ii) se pregon de un sujeto de especial protección constitucional y/o (iii) implica poner a la persona afectada en una condición de indefensión por su falta de capacidad de pago para hacer valer ese derecho.

Así pues, la jurisprudencia constitucional ha dejado de decir que tutela el derecho a la salud 'en conexidad con el derecho a la vida y a la integridad personal', para pasar a proteger el derecho 'fundamental autónomo a la salud'. Para la jurisprudencia constitucional "(...) no brindar los medicamentos previstos en cualquiera de los planes obligatorios de salud, o no permitir la realización de las cirugías amparadas por el plan, constituye una vulneración al derecho fundamental a la salud." (Subrayado y cursiva fuera del texto).

También debe tenerse en cuenta, que el Estado colombiano expidió la ley estatutaria de la salud (Ley 1751 de 2015) sancionada por el señor presidente de la república, el día 16 de febrero de ésa misma anualidad; disposición por medio de la cual se consagra la salud como derecho de carácter fundamental autónomo.

Tenemos entonces que la salud se reconoce no sólo a nivel interno en la Carta Magna y en su desarrollo por órganos del Estado, como lo son el propio ejecutivo y legislativo con la expedición de la ley estatutaria de la salud, sino también por la Honorable Corte Constitucional en sus providencias como un derecho constitucional inalienable; consideración que trasciende las fronteras; ello cuando a nivel internacional también se reconoce la salud como derecho fundamental.

CARENCIA ACTUAL DE OBJETO.

La protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales vulnerados o amenazados, por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, constituye el fundamento objetivo del artículo 86 de la Constitución Política Nacional.

Este amparo conlleva a la impartición de una orden de inmediato cumplimiento, siendo este el mecanismo efectivo, cuando realmente sea necesario para superar el quebrantamiento de los derechos fundamentales.

De existir otro medio de defensa judicial, como puede ser la jurisdicción ordinaria, este impide la activación del amparo constitucional, mediante la acción de tutela, por ser este un mecanismo subsidiario y residual el cual no puede suplantar los instrumentos judiciales previstos para cada especialidad, sin embargo de manera excepcional pueda actuar este mecanismo con la condición de ser transitorio pan evitar un perjuicio irremediable.

En ese orden, cuando el accionado desarrolla los actos necesarios para deshacer el agravio, es decir, observa y satisface las pretensiones del accionante mediante la actividad tendida, arriba a lo que la teoría constitucional ha denominado la carencia actual del objeto, por ser innecesario el pronunciamiento del juez a los planteamientos de fondo del escrito de tutela.

En este sentido la Corte se ha pronunciado indicando: *"ante la ausencia de supuestos fácticos, la decisión que pudiese tomar el juez en el caso concreto para resolver la pretensión se convertiría en ineficaz"*¹.

Las pretensiones satisfechas carecen de sentido dentro de la acción de tutela ya que:

*"(...) pierde su razón de ser cuando durante el trámite de/proceso, la situación que genera la amenaza o vulneración de los derechos, fundamentales invocados es superada o finalmente produce el daño que se pretendía evitar con la solicitud de amparo"*², en otras palabras, si: *"previamente al pronunciamiento de/juez de tutela, sucede lo requerido, es claro que se está frente a un hecho superado, porque desaparece la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales"*³.

Sobre el particular, la Sentencia T- 154 de 2017, donde actuó como Magistrada Ponente la Doctora María Victoria Calle Correa, dispone:

"De conformidad con el Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia constitucional, la carencia actual de objeto se presenta en tres hipótesis: (i) cuando existe un hecho superado, (ii) cuando se presenta daño consumado, o (iii) cuando se está ante un hecho sobreviniente

*En lo que respecta a la carencia actual de objeto por hecho superado, la jurisprudencia constitucional, ha sostenido que esta **se presenta cuando entre la interposición de la acción de tutela y el fallo de la misma, se satisface por completo la pretensión contenida en la demanda, es decir, que por razones ajenas a la intervención del juez constitucional, desaparece la causa que originó la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales del peticionario.**" (Negrillas Propias.)*

A su turno, la Sentencia T – 013 de 2017, donde actuó como Magistrado Ponente el Doctor Alberto Rojas Ríos, indicó que:

*"No obstante, cuando la situación de hecho que causa la supuesta amenaza o vulneración del derecho alegado desaparece o se encuentra superada, la acción de tutela pierde toda razón de ser como mecanismo más apropiado y expedito de protección judicial. (...) **En ese orden, si la acción de tutela busca es ordenar a una autoridad pública o un particular que actúe o deje de hacerlo, y previamente al pronunciamiento del juez de tutela, sucede lo requerido, es claro que se está frente a un hecho superado, porque desaparece la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales,** en otras palabras, ya no existirían circunstancias reales que materialicen la decisión del juez de tutela."* (Negrillas propias.)

I. CASO CONCRETO

La parte actora interpone este mecanismo sumarial, con el fin de que se protejan los derechos fundamentales a la salud en conexidad con el derecho a la vida, los cuales están siendo vulnerados por parte de la entidad accionada, al no autorizar y materializar la entrega del AUDÍFONO DIGITAL DE CANAL ABIERTO DERECHO que le fue prescrito por el médico tratante, además de solicitar tratamiento médico integral.

¹T-011 de 2016.

²T-970 de 2014.

³T-168 de 2008.

La acción de tutela fue admitida y notificada la **EPS DE LA POLICÍA NACIONAL CLÍNICA LA TOSCANA (UNIDAD PRESTADORA DE SALUD DE CALDAS)** y a **SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL** quienes se pronunciaron frente al mecanismo constitucional impetrado indicando, por parte de la **EPS DE LA POLICÍA NACIONAL CLÍNICA LA TOSCANA (UNIDAD PRESTADORA DE SALUD DE CALDAS)** que en el presente caso ya había sido autorizado el AUDÍFONO DIGITAL DE CANAL ABIERTO DERECHO y se le había informado a la accionante para que procediera a reclamar el insumo en la entidad AUDICOM S.A.S en la ciudad de Pereira.

La anterior información fue constatada por el Despacho, mediante llamada telefónica que se le hiciera a la accionante al abonado telefónico registrado en el escrito de tutela, quien manifestó que ya había reclamado la autorización emitida por su EPS DE LA POLICÍA NACIONAL CLÍNICA LA TOSCANA y que procedería la semana entrante a su reclamación.

CONCLUSIÓN

Así las cosas, esta Juez Constitucional determina, que si bien es cierto existió una controversia que generó la reclamación por vía de acción de tutela, actualmente ha dejado de existir ante la materialización de la AUTORIZACIÓN para la entrega del insumo denominado AUDÍFONO DIGITAL DE CANAL ABIERTO DERECHO por lo que a este punto de la tutela resulta inútil e irrazonable ahondar más sobre el asunto, estando en tal sentido en el caso objeto en estudio, frente a una carencia actual de objeto por “Hecho Superado” en lo que respecta a dicho pedimento.

Ahora, si bien la entidad accionada manifiesta que ya le fue autorizada la entrega de AUDÍFONO DIGITAL DE CANAL ABIERTO DERECHO; información que fue constatada con la accionante, lo cierto es que la misma no ha sido materializada; por lo que se hace necesario conceder el amparo constitucional reclamado respecto de los derechos anunciados por la accionante y como efecto implícito de ello, se ordenará a la **EPS DE LA POLICÍA NACIONAL CLÍNICA LA TOSCANA (UNIDAD PRESTADORA DE SALUD DE CALDAS)** que deberá disponer lo necesario para materializar la entrega del insumo denominado cita denominada AUDÍFONO DIGITAL DE CANAL ABIERTO DERECHO en la entidad indicada como AUDICOM S.A.S en la ciudad de Pereira, sin ningún tipo de dilaciones.

Ahora, respecto del tratamiento integral solicitado, es de anotar que la jurisprudencia constitucional ha señalado que el principio de integralidad impone su prestación continua, la cual debe ser comprensiva de todos los servicios requeridos para recuperar la salud. La determinación de los mismos no corresponde al usuario, sino al médico tratante adscrito a la E.P.S.:

“(…) La atención y tratamiento a que tienen derecho los pertenecientes al sistema de seguridad social en salud cuyo estado de enfermedad esté afectando su integridad personal o su vida en condiciones dignas, son integrales; es decir, deben contener todo cuidado, suministro de medicamentos, intervenciones quirúrgicas, prácticas de rehabilitación, exámenes para el diagnóstico y el seguimiento, así como todo otro

componente que el médico tratante valore como necesario para el pleno restablecimiento de la salud del paciente o para mitigar las dolencias que le impiden llevar su vida en mejores condiciones; y en tal dimensión, debe ser proporcionado a sus afiliados por las entidades encargadas de prestar el servicio público de la seguridad social en salud (...)”

Así, la integralidad en la prestación del servicio de salud está encaminada a garantizar su continuidad, y evitar a los accionantes la interposición de nuevas acciones de tutela por cada nuevo servicio que sea prescrito por los médicos adscritos a la entidad, con ocasión de la misma patología. En consecuencia, una EPS, vulnera el derecho fundamental a la salud de una persona cuando presta un servicio en salud fraccionado, dejando por fuera exámenes, medicamentos y demás procedimientos que la persona requiere para recuperarse o aminorar sus padecimientos, todos los cuales hayan sido prescritos por el médico tratante. No importa si algunos de los servicios en salud son P.O.S. y otros no lo son, pues las entidades e instituciones de salud son solidarias entre sí, sin perjuicio de las reglas que indiquen quién debe asumir el costo y del reconocimiento de los servicios adicionales en que haya incurrido una entidad que garantizó la prestación del servicio de salud, pese a no corresponderle.

En el presente asunto no es evidencia procesal que la accionada se encuentre suministrando los servicios de salud fraccionados o que reiterativamente se haya dejado de prestar dichos servicios a la accionante, de manera pues que no existen méritos para ordenar el tratamiento integral deprecado.

Por lo dicho, el Juzgado Sexto Civil de Manizales, Caldas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley:

RESUELVE

PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales a la salud en conexidad con el derecho a la vida, invocados por la señora **MARIA LIGIA CADAVID DE LOPEZ**, en contra de la **EPS CLÍNICA DE LA POLICÍA LA TOSCANA** y donde fue vinculada **SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL**, por lo dicho en esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la **EPS DE LA POLICÍA NACIONAL CLÍNICA LA TOSCANA (UNIDAD PRESTADORA DE SALUD DE CALDAS)** materializar la entrega del insumo denominado cita denominada AUDÍFONO DIGITAL DE CANAL ABIERTO DERECHO en la entidad indicada como AUDICOM S.A.S en la ciudad de Pereira, sin ningún tipo de dilaciones.

TERCERO: DECLARAR que sobre la presente acción de tutela ha operado la **CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO** respecto de la autorización de la entrega del insumo solicitado.

CUARTO: NO TUTELAR el tratamiento integral solicitado, por lo dicho en precedencia.

QUINTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito a las partes, informándoles en tal acto que pueden impugnar esta decisión dentro de los tres días siguientes a su notificación.

SEXTO: De no ser impugnada esta sentencia, se ordena remitir el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


VALENTINA SANZ MEJÍA
JUEZ

Firmado Por:

VALENTINA SANZ MEJIA

JUEZ

JUEZ - JUZGADO 006 MUNICIPAL CIVIL DE LA CIUDAD DE MANIZALES-CALDAS

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **d6e0c70c88f776ad4221b8047e106f8cd0cb1483e06b53a1d78cf8340c1b9c37**

Documento generado en 24/05/2021 09:56:04 AM